

SEGUNDAS JORNADAS NACIONALES DE HISTORIA SOCIAL
13, 14 y 15 de mayo de 2009
La Falda, Córdoba - Argentina

Mesa 3: Las condiciones materiales de vida (siglos XVI-XX)

Autor: Lic. Matías Ignacio Wibaux

Inserción institucional: Grupo de Investigación Sociedad y Estado “Prof. Ángela María Fernández”. Facultad de Humanidades. Universidad Nacional de Mar del Plata

Situación de revista: Becario Postgrado Tipo I CONICET

Título:

La regulación estatal del mercado: Leyes, consumidores y comerciantes. Buenos Aires en la primera mitad del siglo XIX

La discusión sobre los procesos de formación estatal en América Latina durante el siglo XIX ha ocupado en los últimos tiempos la atención de investigadores de diversas disciplinas sociales. Dentro de este panorama, una de las problemáticas centrales ha sido el análisis de los mecanismos por los cuales se fueron construyendo o edificando sistemas de coerción y dominación social en el mundo rural y especialmente en los espacios fronterizos. No obstante ello, existe poca información referida a las formas de intervención estatal sobre el mercado y las prácticas comerciales durante el siglo XIX en el Río de la Plata, especialmente de qué manera las políticas públicas podrían haber incidido en los hábitos de consumo cotidianos y las condiciones de vida de los pobladores rurales.

El presente trabajo centrará la mirada en las prohibiciones y controles estatales sobre el mercado, a partir del análisis de reglamentos de comercialización, así como también de leyes o decretos tendientes a la fijación de precios máximos para los productos alimenticios de consumo cotidiano. En segundo término, se abordará el estudio de las diversas leyes aduaneras – especialmente la de 1836 – y su posible impacto en los hábitos de consumo. Por último, dentro del conjunto de dispositivos implementados, profundizaremos también en las políticas llevadas adelante para ejercer un control de determinadas prácticas comerciales consideradas ilegales o que ponían en jaque las reglas de juego vigentes: los mercachifles, las pulperías volantes y el comercio interétnico. Para ello, daremos cuenta de cierta bibliografía específica que ha

abordado estas temáticas y analizaremos la normativa legal (decretos, leyes) a partir del relevamiento del Registro Oficial de la Provincia de Buenos Aires.

En los últimos tiempos la discusión sobre los procesos de formación estatal en América Latina durante el siglo XIX ha ocupado la atención de investigadores de diversas disciplinas sociales. Dentro de este panorama, una de las problemáticas centrales ha sido el análisis de los mecanismos por los cuales se fueron construyendo o edificando sistemas de coerción y dominación social en el mundo rural y especialmente en los espacios fronterizos. En este sentido, resultan interesantes los análisis históricos que centran su mirada en las formas en que – teniendo como base el consenso de la sociedad – se definen determinados valores e intereses comunes que le dan legitimidad a la acción estatal y aseguran los sistemas de coerción y dominación.¹ Así, se ha profundizado en el estudio de las relaciones entre las formaciones estatales emergentes y la sociedad civil, dando cuenta del impacto de las formas de intervención estatal en las comunidades y sus formas de resistencia y adaptación.² Dentro de este panorama, la historiografía argentina ha dedicado mayor atención al proceso de construcción de instituciones en el mundo rural y las formas que fue asumiendo la dominación social y política.³ Recientes investigaciones han explorado el complejo proceso de construcción del poder institucional en el ámbito rural haciendo hincapié en las relaciones entre poder, espacio y población, con el objeto de develar la capacidad logística de acción del estado.⁴ Según Raúl Fradkin y María Elena Barral, “...la coerción estatal define en su

¹ Existe una amplia producción bibliográfica para la experiencia norteamericana. Para el caso del Río de la Plata, son sugerentes los aportes de Eduardo Míguez en referencia al proceso de construcción de un orden social en el mundo rural durante la primera mitad del siglo XIX. Míguez, Eduardo “La construcción del orden social en el Río de la Plata antes de la consolidación del Estado-Nación”, *Actas “Jornadas de Trabajo y Discusión, Problemas y debates del temprano siglo XIX. Espacio, Redes y Poder”*, Mar del Plata, Ediciones Suárez /Seminario Siglo XIX, 2005. Míguez, Eduardo, “Guerra y Orden social en los orígenes de la Nación Argentina, 1810 - 1880, *Anuario IEHS*, N° 18, 2003, pp. 17-38.

² Véase Joseph, Gilbert y Nugent, Daniel (edit.), *Everyday Forms of State Formation. Revolution and the Negotiation of Rule in Modern Mexico*, Durham, Duke University Press, 1994.

³ Véase Barreneche, Osvaldo, *Dentro de la ley, TODO. La justicia criminal de Buenos Aires en la etapa formativa del sistema penal moderno de la Argentina*, La Plata, Ediciones Al Margen, 2001. Para una mirada sobre América Latina y Europa véase Garavaglia, Juan Carlos y Schaub, Jean F., *Lois, Justice, Coutume, Amérique et Europe latines (XVI-XIX siècle)*, Paris, Editions de L'Ecole des Hautes Études en Sciences Sociales, 2005.

⁴ Véase Fradkin, Raúl (comp.), *El poder y la vara. Estudios sobre la justicia y la construcción del Estado en el Buenos Aires rural (1780-1830)*, Prometeo, Buenos Aires, 2007; Barral, María Elena y Fradkin, Raúl, “Los pueblos y la construcción de las estructuras de poder institucional en la campaña bonaerense (1785-1836)”, *Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr Emilio Ravignani”*, Tercera Serie, N° 27, 1er Semestre 2005, pp 7-48; Barral, María E. y Fradkin, Raúl, “Redes y sedes de poder institucional en la campaña bonaerense (1785/1836)”, trabajo presentado en la Jornada de debate: Sociedad e instituciones en la pampa, siglos XVIII-XIX, Red de Estudios Rurales (RER)- Programa de

*ejercicio un ámbito territorial y ello supone el desarrollo de toda una serie de medios coercitivos que no se reducen a la fuerza armada sino que deben incluir la capacidad de controlar, vigilar, castigar, educar, juzgar y hasta transformar los hábitos y costumbres de la población.”*⁵ De esta manera han identificado tres tipos de redes diferenciadas con sus propias lógicas, jerarquías e intensidades de inserción en el medio social rural: la militar-miliciana, la eclesiástica y la judicial-policial.

Pese al avance en estas líneas de investigación, existe poca información referida a las formas de intervención estatal sobre el mercado y las prácticas comerciales durante el siglo XIX en el Río de la Plata, especialmente de qué manera las políticas públicas podrían haber incidido en los hábitos de consumo cotidianos de los pobladores rurales. Dentro de los objetivos particulares planteados en mi proyecto general de investigación se encuentra el de indagar el papel jugado por el Estado en la definición de pautas de consumo alimenticio en el ámbito rural bonaerense durante el siglo XIX. Por ello, en este trabajo se pretende avanzar en la exploración de las normativas y disposiciones legales establecidas desde la esfera gubernamental en la primera mitad del siglo XIX, haciendo especial hincapié en la experiencia rosista.

En primer lugar, se centrará la mirada en las prohibiciones y controles estatales sobre el mercado, a partir del análisis de reglamentos de comercialización, así como también de leyes o decretos tendientes a la fijación de precios máximos para los productos alimenticios de consumo cotidiano. En segundo término, dedicaremos algunas paginas al estudio de la legislación aduanera – especialmente la Ley de 1836 – y su posible impacto en los hábitos de consumo. Por ultimo, dentro del conjunto de dispositivos implementados, profundizaremos también en las políticas llevadas adelante para ejercer un control de determinadas prácticas comerciales consideradas ilegales o que ponían en jaque las reglas de juego vigentes: los mercachifles, las pulperías volantes y el comercio interétnico. Para ello, como una primera aproximación a la temática en cuestión, daremos cuenta de cierta bibliografía específica y analizaremos la normativa legal (decretos, leyes) a partir del relevamiento del Registro Oficial de la Provincia de Buenos Aires.

Estudios Rurales (PROER), Instituto Ravignani, Universidad Nacional de Buenos Aires, Buenos Aires, 2003.

⁵ Estos autores basan su análisis en los planteos de Charles Tilly, quien afirma que “...*estos medios coercitivos son un producto social que pueden acumularse y concentrarse y en realidad es este mismo proceso de acumulación y concentración el que en buena medida define el proceso de formación estatal. En esas condiciones, la formación estatal puede ser vista como un proceso de inclusión social en una trama de actividades institucionales que implica la fijación de nuevas y crecientes obligaciones para la población.*” *Ibíd.*, pág. 2

La preocupación por los alimentos básicos.

Desde la época colonial, las políticas de fijación de precios y de regulación del abastecimiento de alimentos de las ciudades fueron un campo de acción y preocupación de las autoridades gubernamentales. Según Thomas Wright, muchas de las ciudades coloniales eran abastecidas por mercados locales o regionales, determinándose las condiciones del aprovisionamiento urbano de alimentos por el clima, las sequías y la manipulación por parte de los productores de ganado y cereales, entre otros factores. Según este autor, la regulación en la América colonial estaba basada en el concepto de economía moral en la que los alimentos, como una necesidad de vida, no eran considerados un objeto de lucro o especulación.⁶

En su estudio sobre el orden estatal y la experiencia subalterna en Buenos Aires durante el régimen rosista, Ricardo Salvatore ha hecho hincapié en la creciente intromisión estatal sobre las vidas de las personas comunes.⁷ Según este autor, la administración rosista llevó orden a los mercados, imponiendo formas de regulación en el transporte, las transacciones y los derechos de propiedad. La regulación del consumo se reflejó principalmente en el control de la producción y distribución de determinados artículos de primera necesidad.

Entre los productos que siempre concitaron la atención de las autoridades podemos ubicar al pan y la harina. La regulación sobre la producción y venta de pan se remontaba a los tiempos coloniales, pero según Salvatore, durante el régimen rosista quedó bajo estricta supervisión. Ya en mayo de 1827, un decreto presidencial insistía en la necesidad que la Policía de la ciudad de Buenos Aires llevara un registro de las marcas particulares de los panaderos, de forma tal de controlar las ventas de este artículo. Un decreto de octubre de 1829, imponía severas multas a los panaderos que infringieran el arancel que fijaba el peso del pan. Las multas abarcaban todo el circuito de producción y comercialización, incluyendo a panaderos y amasadores de pan, pulperos y repartidores. Pero más allá del monto de las multas y sus destinatarios,

⁶ Wright, Thomas, "The Politics of Urban Provisioning in Latin American History", en Super, John y Wright, Thomas (edit.), *Food, Politics, and Society in Latin America*, Latin American Studies Series, University of Nebraska Press, 1985, p. 25. Resulta más que interesante pensar nuestra problemática de investigación poniendo en juego la noción de economía moral formulada por E. P. Thompson. Véase Thompson, E. P. *Costumbres en común*, Crítica, 2000. Capítulos 4 y 5.

⁷ Salvatore, Ricardo, *Wandering paysanos: state order and subaltern experience in Buenos Aires during the Rosas era*, Duke University Press, 2003.

resulta interesante prestar atención a la justificación de esta medida. Los considerandos del decreto dan cuenta que:

*“Si es justo atender a las necesidades públicas proporcionando á los fabricantes las harinas necesarias para la elaboración de pan, y que la autoridad se ocupe en meditar las medidas para que no falte este artículo de consumo, lo es también el que los consumidores no queden espuestos por mas tiempo á la arbitrariedad, haciéndoseles sentir la escasez por aquellos que se han sobrepuesto repetidas veces a las disposiciones gubernativas....”*⁸

Podemos observar cómo la preocupación gubernamental no solo estaba fijada en el productor o el comerciante – su acceso a la harina para la producción – sino que apuntaba especialmente a los consumidores. En este sentido, Salvatore encuentra en las disposiciones del rosismo un esfuerzo por asegurar un mínimo de calidad a los consumidores, asegurando que el peso de cada pieza de pan coincidiera con las regulaciones estipuladas.

Este interés estatal por el bienestar de los habitantes se manifiesta claramente también en las diversas resoluciones relativas a la fijación de un precio máximo para el abasto de carne en la ciudad de Buenos Aires y la campaña.⁹ Tal como expresaba el decreto del 22 de septiembre de 1836, que declaraba libre la venta de carne: *“considerando además que de la abundancia y baratura de los alimentos que son de primera necesidad en un pueblo, depende el bienestar de sus habitantes, el aumento de su población, y el progreso de la industria, toda vez que la baratura no sea con ruina de los ciudadanos que concurran á su producción y abasto.”*¹⁰

Esta disposición nos muestra también algunos fundamentos interesantes de la intervención estatal sobre el mercado, dando cuenta de la necesidad de asegurar a los habitantes el acceso a productos indispensables de la dieta cotidiana. En el mismo decreto puede leerse que:

⁸ Fondo Antiguo. Biblioteca Central. Universidad Nacional de Mar del Plata. Nueva Recopilación de Leyes y Decretos de la Provincia de Buenos Aires (1810-1876). Documento. N° 1086.

⁹ Según Ricardo Salvatore, solo el abastecimiento de carne en las guarniciones militares era desregulado ya que los comandantes tenían que negociar precios con los estancieros y estaban obligados a pagar los precios corrientes en la localidad. Salvatore, Ricardo, *Wandering paysanos...*, op. cit, p. 40.

¹⁰Fondo Antiguo. Biblioteca Central. Universidad Nacional de Mar del Plata. Registro Oficial del Gobierno de Buenos Aires. Documento N° 1075. Septiembre 21 de 1836.

“el pan, y la carne son para la subsistencia de todas las clases de la población de esta Provincia, dos artículos tan necesarios, que su falta no puede absolutamente suplirse en lo general con otros algunos, y que la necesidad de proveerse diariamente de ellos, y á las horas de costumbre es tan urgente, cuanto que su alteración no solo trastorna el entable y órden de las casas de familias, y establecimientos de labor, sino también distrae de sus principales y mas precisas ocupaciones á la generalidad de los habitantes, y que por consiguiente en el comercio de compra y venta de dichos artículos no hay, ni puede haber esa igual libertad en los consumidores y los abastecedores, que fija el justo precio de las cosas: estando aquellos obligados por necesidad á comprarlos á cualquier precio que se les pida, por exorbitante que sea, y pudiendo estos dejar de venderlos toda vez que no se les dé el que pidan arbitrariamente.”

De esta manera, como una forma de protección de los habitantes, el Gobierno decretó la libre venta de la carne, siempre y cuando no superara el precio sumo dictaminado (según las circunstancias del mercado) por una Comisión nombrada por el gobierno. Según la normativa, dicha Comisión *“tendrá presente el precio corriente de los ganados de abasto, los costos y riesgos de su conducción, y demás gastos para la venta por menor de la carne”*. Resulta significativa la búsqueda de equilibrio entre los intereses de los comerciantes o productores y los consumidores, ya que el decreto plantea también que *“debe permitirse a los abastecedores tengan una buena ganancia, que corresponda abundantemente a su trabajo y diligencia, sin que decline en un exceso que cause justas quejas en el pueblo.”*

La falta de cumplimiento de alguno de los artículos del decreto – ya sea el precio fijado por la comisión o las cantidades de carne vendidas – implicaba multas y castigos considerables para los infractores, llegando a la prisión de los vendedores en falta.¹¹ Los encargados de la comprobación de posibles infracciones del decreto eran el Jefe de Policía en la ciudad de Buenos Aires y los Jueces de Paz en la campaña, quienes debían ocuparse de que los abastecedores y vendedores al menudeo tengan consigo la correspondiente libreta y planillas que indiquen el precio sumo de la carne y asegurar

¹¹ Según el artículo 4 del decreto, las fracciones en que se debía vender la carne y fijar el precio sumo eran arroba, media arroba, cuarta y octava de arroba. El Art. 6 expresaba que ningún vendedor de carne podrá resistirse a vender a cualquiera persona que quiera comprarle de determinada parte de la res, con tal que no exceda de una arroba la porción que pida, y la pague de contado al precio fijado en la libreta.

que éste sea expuesto a lectura pública en una tablilla.¹² Tal como ya expresamos, este trabajo es una primera aproximación desde un plano normativo, por lo que no hemos avanzado en la exploración de la aplicación efectiva de las leyes y determinar si los individuos pagaban las multas o terminaban presos al no cumplimentar las disposiciones gubernamentales.

Las políticas aduaneras y los consumidores.

En este apartado nos ocuparemos especialmente de la Ley de Aduana de 1836, con el fin de discutir cuál fue el impacto de esta forma de intervención estatal sobre el consumo de los pobladores de la ciudad y la campaña de Buenos Aires. Nos interesa avanzar en la reflexión de esta cuestión habida cuenta que la imposición de derechos aduaneros sobre determinados productos podría haber incidido notablemente en la circulación de determinadas mercancías, la oferta de artículos en los negocios rurales y el acceso efectivo a ellas por parte de los habitantes.¹³ Debemos señalar que existe una amplia y prolífica producción historiográfica que ha profundizado en los alcances de las diversas políticas aduaneras ensayadas durante la primera mitad del siglo XIX.¹⁴ En la mayoría de los casos, el punto de partida de las investigaciones ha sido la discusión teórica, muchas veces estéril, acerca del carácter proteccionista o librecambista de los derechos aduaneros establecidos por los gobiernos. De esta manera, la insistencia por remarcar el enfrentamiento entre Buenos Aires y el Interior, no permitió entender los alcances de estas leyes en función de las necesidades y los objetivos perseguidos en cada coyuntura histórica. En este sentido, las investigaciones históricas recientes han demostrado que, por ejemplo, las leyes de Aduana de 1821 y 1836 no solo buscaban

¹² En relación a las planillas resulta relevante la información presentada por la Comisión en su Informe fechado el 29 de septiembre de 1836, en el que se adjuntan las planillas para la demostración del precio. También allí se especifica con mayor detenimiento las cuestiones puestas a consideración por la Comisión para fijar el precio máximo de la carne. Registro Oficial del Gobierno de Buenos Aires. Documento N° 1075. Septiembre 21 de 1836, pp. 106-119

¹³ Para una mejor comprensión del funcionamiento del comercio minorista en la ciudad de Buenos Aires y la campaña, véase Mayo, Carlos (dir), *Vivir en la frontera. La casa, la dieta, la pulpería, la escuela (1770-1870)*, Buenos Aires, Editorial Biblos, 2000. Mayo, Carlos (dir), *Pulperos y pulperías de Buenos Aires 1740-1830*, Mar del Plata, UNMDP, 1996 (hay reedición corregida y aumentada: Buenos Aires, Biblos, 2000)

¹⁴ Cfr. Mariluz Urquijo, José, *Estado e industria. 1810-1862*, Buenos Aires, Macchi, 1969. Nicolau, Juan Carlos, *Industria argentina y aduana. 1835-1854*, Buenos Aires, Editorial Devenir, 1975. Bejar, María Dolores, *Buenos Aires y la Aduana. 1809-1862*, Historia Testimonial Argentina, Centro Editor de América Latina, 1984. Burgin, Miron, *Aspectos económicos del federalismo argentino*, Buenos Aires, Ediciones Solar, 1975. Halperín Donghi, Tulio, *Guerra y finanzas en los orígenes del Estado argentino (1791-1850)*, Buenos Aires, Editorial de Belgrano, 1982.

generar ingresos fiscales sino que también se constituyeron en mecanismos para diseñar medidas y orientaciones económicas.¹⁵ Asimismo, se ha puesto de manifiesto la dimensión política de la ley de 1835, que pretendía constituirse en un gesto de Buenos Aires frente a las presiones e intereses de las provincias, principalmente las del Litoral.¹⁶

La promulgación de la ley de Aduanas de 1836 venía antecedida por numerosos debates entre los representantes de Buenos Aires y gobernadores del Interior acerca de la necesidad de una política fiscal proteccionista para fomentar las industrias provinciales frente a la introducción masiva de manufacturas extranjeras.¹⁷ En comparación con la ley de 1821, la estructura fiscal se mantuvo, conservándose las tarifas ad-valorem para la importación y los impuestos fijos a las exportaciones, siendo lo más llamativo y novedoso la prohibición absoluta para la introducción de ciertas mercancías y la fijación de tarifas porcentuales elevadas para algunos productos regionales. Según Claudio Panella, la ley rosista tendió a beneficiar en primer término a las producciones de Buenos Aires y sólo después a las del interior, siempre y cuando no se afectaran los ingresos fiscales y el interés de los consumidores.¹⁸

Nos interesa aquí analizar con más detenimiento los aranceles y las disposiciones relacionadas con los productos alimenticios.¹⁹ En primer lugar, se prohibía totalmente la introducción de toda clase de legumbres y también la cebada y el maíz, al tiempo que las papas (cuya producción no era suficiente para satisfacer el consumo), quedaban recargadas con un 50 % de su valor y los garbanzos, gravados en un 24 %. En el caso de las harinas y el trigo no se permitía su importación mientras su

¹⁵ Esta cuestión ya había sido formulada por Miron Burgin para la Ley de Aduana de 1821 planteando que se enmarcaba en un proceso general de reformas financieras, fiscales y monetarias tendientes a la reorganización económica. Véase Burgin, Miron, *Aspectos económicos...*, op. cit.

¹⁶ Según John Lynch, las medidas arancelarias impuestas no forman parte de una política nacional sino que llevaban consigo un contenido interprovincial en función de que se pretendía que la política federal alcanzara cierto grado de credibilidad. En un sentido similar, María Dolores Bejar plantea que las causas de esta nueva ley pueden encontrarse en la intención de Rosas de conciliar diferentes intereses regionales. Cfr. Lynch, John, *Juan Manuel de Rosas, 1829-1852*. Buenos Aires, Emecé, 1985. Bejar, María Dolores, *Buenos Aires y la Aduana...*, op. cit.

¹⁷ El aporte reciente más interesante sobre los efectos de la Ley de Aduana en las provincias del Interior es el de Claudio Panella, quien aborda el estudio de las consecuencias económicas y políticas de esta legislación en los diversos espacios regionales que conformaban la Confederación rosista. Véase Panella, Claudio, *La Ley de Aduana de 1836 y su incidencia en las provincias. Un aspecto de la economía rosista*, La Plata, Instituto de Historia Argentina, Universidad Nacional de La Plata, 2000.

¹⁸ Ibidem, pp. 295-296.

¹⁹ La legislación abarcaba en sus seis capítulos una amplia variedad de mercaderías importadas y productos regionales, estableciendo como ya dijimos derechos para la exportación, la importación y el intercambio interregional. Ley de Aduana de 1836. Citado en Panella, Claudio, *La Ley de Aduana de 1836...*, op. cit., pp. 302-306.

precio no pasase de 50 pesos la fanega. Las yerbas y el tabaco del Paraguay Corrientes y Misiones pagaban un módico derecho del 10 %, mientras que el aforo destinado a la yerba proveniente del Brasil alcanzaba al 24 %. Otras infusiones como el café, el té y el cacao fueron recargados con un 24 %, al igual que el azúcar importado. En el caso del vino, los vinagres, los aguardientes y los licores los aforos eran del 35 por ciento mientras que la sidra y la cerveza fueron gravadas con fuertes impuestos del 35 % y 50 %, respectivamente.²⁰

De esta forma, vemos que los productos de consumo alimenticio cotidiano se constituyeron en un rubro importante de los artículos puestos a consideración en la legislación. Un interrogante a plantear tiene que ver con los fundamentos de esta medida: ¿podemos observar en su formulación una preocupación gubernamental por defender a los consumidores? Según Panella, el gobierno porteño dio prioridad a las necesidades de sus consumidores y de una parte de sus artesanos, y luego apuntó a satisfacer las demandas proteccionistas del Interior.²¹ Pero debiéramos preguntarnos también de qué manera la fijación de aranceles afectó los hábitos de consumo cotidianos. Esto es, ¿podría decirse que la imposición de aranceles a determinados productos significó un incremento en sus precios y, por consiguiente, mayores dificultades económicas para acceder a ellos? O por el contrario, ¿el impacto positivo sobre determinadas *industrias* regionales trajo aparejado una mejor situación para sus trabajadores, dando lugar a un mayor poder adquisitivo y capacidad de compra?²²

Debemos señalar que los alcances de la protección fueron disímiles en función de cada producto y especialmente de la coyuntura política y económica. Cabe señalar además que muchos de sus objetivos no pudieron llevarse adelante en virtud del bloqueo francés del puerto de Buenos Aires y la reanudación de las luchas facciosas. Con el paso del tiempo, se procedió a levantar la mayoría de las prohibiciones, amparándose en las necesidades fiscales y la escasez de productos. En el caso de la prohibición de importar trigo, harinas y otros cereales brindó cierto impulso a la agricultura porteña, aunque no era una medida del todo novedosa, ya que se habían

²⁰ Un 35% también se pagaba por la introducción de frutas secas (pasas de uva e higo) y quesos importados.

²¹ Panella, Claudio, *La Ley de Aduana de 1836...*, op. cit., p. 80. Un dato no menor en este sentido es que el gravamen impuesto a los productos interiores - tabaco, cigarros, suelas- que competían con la economía porteña.

²² Para Juan Carlos Nicolau además de obtener la confianza del Interior, mantener la hegemonía sobre la Aduana y contribuir al desarrollo de la agricultura, la ley rosista perseguía el objetivo de lograr fuentes de trabajo para la clase media porteña como una forma de control social. Véase Nicolau, Juan Carlos, *Industria argentina*, op. cit.

ensayado medidas similares con anterioridad para asegurar la provisión de pan. En abril de 1830, por ejemplo, decretó la prohibición de exportar trigo, considerando la escasez de la cosecha y el alto precio de los granos, temiendo exponer a una *“carestía repentina y exorbitante del pan, que debe precaverse cuidadosamente, para no aumentar la penuria demasiado sensible que sufren las familias”*

Pulperos, mercachifles e indígenas. El Estado y las prácticas comerciales.

Tal como expresamos anteriormente nos interesa aprehender de qué forma el Estado, en su intento de monopolizar/controlar las relaciones sociales y económicas, y ejercer cierta dominación social apuntó sus cañones a determinadas prácticas mercantiles que debían ser encauzadas según los parámetros emanados desde las autoridades.

Según Richard Slatta, partiendo de una perspectiva conflictivista de la criminalidad, los funcionarios y estancieros durante el siglo XIX emplearon la ley y las definiciones sobre lo legal y lo criminal para imponer un control social y laboral sobre la población rural bonaerense.²³ De esta manera, los estatutos sobre vagancia y conscripción, las papeletas de conchavo, el pasaporte exigido para transitar por los diferentes pagos de la provincia, reflejaban los esfuerzos de la elite por domesticar y subordinar la subcultura del gaucho. Según Slatta, los intentos por controlar la fuerza laboral rural terminarán afectando a la gran mayoría de la población adulta masculina, que verá limitada su movilidad espacial y sus opciones económicas. En este sentido, la vigilancia del robo de ganado, el tráfico ilícito de cuero y otros frutos del país apuntan a poner fin a los circuitos económicos alternativos que permiten la subsistencia del gaucho, intercambiando mercancías mal habidas con los indígenas sin emplearse en ningún establecimiento productivo.

Según Ricardo Salvatore, Juan Manuel de Rosas, persuadido que las leyes tenían que gobernar las interacciones sociales, enfatizó la aplicación de los estatutos legales vigentes, haciendo del retorno a la tranquilidad y el orden en el mundo rural el principal objetivo de su administración. En su trabajo, Salvatore pretende interrogar el orden instrumentado por las autoridades estatales en las dimensiones económicas, legales, militares y políticas, al mismo tiempo que busca recuperar las manifestaciones

²³ Esta postura, sustentada en el marxismo, considera a la ley como una ideología que legitima el poder de una clase social sobre otra. Véase Slatta, Richard, *El gaucho y el ocaso de la frontera*, Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 1985

fragmentarias de los sujetos subalternos, aprehendiendo sus discursos, experiencias y su mentalidad.

Como hemos planteado con anterioridad, las autoridades (provinciales o nacionales) pusieron en práctica determinadas medidas para poner freno a algunas actividades o prácticas mercantiles que consideraban ilegales o fuera de los parámetros que se consideraban civilizados: las pulperías volantes y los mercachifles. En primer lugar, nos detendremos a analizar las actividades ejercidas por estos comerciantes, para luego centrarnos en las diferentes medidas que pretendían regular su accionar.

Las pulperías volantes que recorrían la campaña, presentaban una marcada variedad en los efectos que ofrecían a los pobladores de estos territorios. Para reflejar un poco mejor cómo eran esas pulperías volantes, vayamos a algunos ejemplos. Entre los efectos de pulpería conducidos por Pedro Pablo Grandoli al campo, podemos encontrar: *un Saquito de pasas de Igo, unos guasipicuases con mas de arroba y media de Yerba, dos Barrilitos con 120 frascos de aguard.te, trese quesos, poco menos de 3 @s. de Galleta, unos guasipicuases con arina, un saquito con la mitad de media quartilla de Sal, una dosena de Cuchillos., un poco de asucar, 39 ps. 3 rrs. emplata., 9 quadernillos de papel, una Caxita, una Carretilla, ocho Cavallos* ²⁴ En Monsalvo en 1832, se encontraron algunos efectos de la pulpería de Don Mateo Quinquela, entre los que podemos mencionar: *“1 Bolsa q. contiene ropa de uso, 3 camisas, 3 calzoncillos, 1 chaleco, 1 Pantalon, 1 fardito con una pza paño y una de lienso, 1 bolsa azucar, 7 camisas de listado, 4 chalecos, 7 gergas cordovesas, 1 barrica galleta, 1 tarro tabaco picado, 1 id.(tarro) de sigarros hasta la mitad, 1 Barrilito vino;”, además de un baúl conteniendo 2 piasas con 25 pañuelos algodón, 3 pañuelos de seda, 1 bulto de ilo y sintas, 2 pzas. de listado comensados, , 2 pzas. bramante, 8 pares sapatos de cuero de muger, 5 id. tafilete, 2 p. medias, 1 pieza lienso comensado, 1 dosena cuchillos cabo blanco...”* ²⁵

Ricardo Rodríguez Molas ha presentado al pulpero volante, como aquel comerciante que, recorriendo con su carreta la campaña, realizaba un comercio de intercambio ofreciendo sus productos por cueros vacunos o de nutria, grasa y lana,

²⁴ El referido Granoli no tenía licencia para llevar estos efectos *a la matanza de Nutrias*. Citado en Inventario efectuado en los Montes de la Reducción, el 9 de diciembre de 1808. AGN, IX 1-4-3

²⁵ Citado en Véase Virgili, Daniel, “Las esquinas de la pampa. Pulperos y pulperías en la frontera bonaerense (1788-1865)”, en Mayo, Carlos (dir), *Vivir en la frontera. La casa, la dieta, la pulpería, la escuela (1770-1870)*, Buenos Aires, Editorial Biblos, 2000, pp. 99-122.

como práctica resultante de una sociedad no monetarizada.²⁶ Muchas veces esta imagen acerca de las pulperías volantes se ha trasladado al resto de los comercios rurales. Aunque no negamos el valor de las pulperías y comercios rurales como acopiadores de frutos del país, no hemos encontrado gran cantidad de casos que demuestren tal relevancia de los cueros, pieles o lanas como productos dominantes en el stock de las pulperías de campaña de retaguardia o de frontera.²⁷

Ricardo Salvatore, ha argumentado que durante el gobierno rosista el comercio al menudeo estuvo sujeto a importantes regulaciones. Las pulperías tenían que registrarse y pagar una licencia o patente al igual que los grandes almacenes, los molinos harineros y los saladeros.²⁸ Por ejemplo, en abril de 1832 se dio a conocer un decreto que ordenaba la prohibición de toda casa de negocio o trato en la campaña, sin la autorización gubernamental. Tal como dictaba el decreto, “*nadie podrá tener en toda la campaña de la provincia tienda, pulpería, casa de negocio o trato sin previo permiso del Gobierno*”, sin arriesgarse a una multa de quinientos pesos y el cierre del negocio.²⁹ En el caso de las pulperías volantes y los comercios itinerantes también se les exigía el pago de patentes para poder operar. En febrero de 1831 se decretó la prohibición de las pulperías volantes en todos los puntos de la campaña, *por los grandes males que producen en la Campaña, fomentando el robo, la embriaguez y el juego*.³⁰ El decreto ordenaba la detención del conductor de la pulpería, (como así también de los mozos que lo acompañen en su servicio), y la decomisación para la venta en pública subasta de todos los artículos y efectos que compongan la pulpería. Además, las penas implicaban también castigos punitivos severos ya que se preveía para los involucrados en estas actividades el destino al servicio de las armas por un año en las tropas veteranas en calidad de soldados. Hacia 1867, existían aún regulaciones al comercio itinerante como una forma de controlar los intercambios entre indígenas y cristianos.³¹ No obstante esto, algunos comerciantes como Manuel Suárez Martínez lograban salir a los campos a

²⁶ Rodríguez Molas, Ricardo: “Las Pulperías”, En: *La vida de nuestro pueblo*, CEAL, Buenos Aires, 1982

²⁷ Véase Virgili, Daniel, “Las esquinas de la pampa...”, op. cit., pp. 99-122.

²⁸ Fondo Antiguo. Biblioteca Central. Universidad Nacional de Mar del Plata. Registro Oficial del Gobierno de Buenos Aires. Febrero de 1836.

²⁹ Fondo Antiguo. Biblioteca Central. Universidad Nacional de Mar del Plata. Registro Oficial del Gobierno de Buenos Aires. Documento N° 324, p. 8. Abril de 1832.

³⁰ Fondo Antiguo. Biblioteca Central. Universidad Nacional de Mar del Plata. Nueva Recopilación de Leyes y Decretos de la Provincia de Buenos Aires (1810-1876). Documento. N° 1157. 1831. El decreto de prohibición alcanzaba también a las tiendas volantes de efectos secos según resolución aclaratoria de marzo de 1831

³¹ Salvatore, Ricardo, *Wandering...*, op. cit, pág. 39.

vender productos de almacén, tienda, ropería, talabartería, calzado y platería por los pagos de Juárez, Tres Arroyos y Necochea sin haber presentado antes las autoridades los permisos o patentes correspondientes.³²

Vayamos ahora al comercio interétnico y su regulación en el período estudiado. Los comerciantes de la frontera – más allá de vender variadas e inmensas mercaderías y bebidas alcohólicas – se constituyeron en importantes fuentes de crédito al adelantarle dinero a los pequeños productores y, en menor medida, en acopiadores de frutos del país.³³ Pero la mercantilización de la sociedad fronteriza debe explicarse también a partir del rol jugado por los intermediarios y conchavadores indígenas. No debemos olvidar que estas redes de comercio parecen haber sido funcionales a ambas sociedades; es más podríamos decir que se generó una complementariedad económica entre los establecimientos productivos cristianos y la economía indígena que requería con mayor fuerza productos agrícolas y ganaderos.³⁴ Estos factores permiten explicar la constante búsqueda de paz por parte de los indígenas que pretendían así incrementar el comercio con el mundo cristiano. Desde 1780 el comercio interétnico se convirtió en el principal eje de las relaciones pacíficas. Desde los tiempos coloniales, se permitió la comercialización en Buenos Aires, y las comitivas y partidas indígenas se dirigieron a la capital con sus respectivos permisos de trueque para intercambiar sus productos (botas, riendas, plumas, cueros, lazos, tejidos) a cambio de yerba, azúcar, aguardiente, cuchillos, harina, tabaco y, por supuesto, yeguas, vacas y caballos.

Muchas de las disposiciones respondían a las urgencias o contingencias de las relaciones y negociaciones con los indígenas. En noviembre de 1824, luego que el gobierno provincial decidiera instalar el Fuerte Independencia, los malones y ataques sobre poblados rurales y establecimientos productivos recrudecieron. Ante esta

³² Suarez Martínez, Manuel, *Paladín del orden y gestor del progreso del parido de Lobería, Apuntes autobiográficos*, edición de autor, 1943, pág. 70 y ss.

³³ Mayo, Carlos (dir), *Vivir en la frontera. La casa, la dieta, la pulpería, la escuela (1770-1870)*, Editorial Biblos, Buenos Aires, 2000. Para profundizar en la comercialización de productos alimenticios, ver Wibaux, Matías, *Del mostrador a la mesa rural: los hábitos alimenticios cotidianos en la campaña bonaerense (1760-1870)*, Tesina de licenciatura, Facultad de Humanidades, Universidad Nacional de Mar del Plata, mimeo, 2004.

³⁴ La historiografía ha dado cuenta de las transformaciones producidas en las sociedades indígenas durante el siglo XIX, entre las que se destaca un proceso gradual de diferenciación social de las comunidades indígenas que implicó un aumento en la demanda de bienes materiales exóticos como símbolos de prestigio. Pero además la sociedad indígena fue adoptando nuevas formas de producir, nuevas actividades económicas que acentuaron su dependencia de mercaderías manufacturadas, y especialmente del comercio de ganados. Véase Mandrini, Raúl, “Desarrollo de una sociedad indígena pastoril en el área interserrana bonaerense”, En: *Anuario IEHS*, n° 2, Universidad Nacional del Centro, Tandil, 1987, pp. 73-98. Palermo, Miguel Angel, “la innovación agropecuaria entre los indígenas pampeano-patagónicos: génesis y procesos, *Anuario IEHS*, N° 3, Universidad Nacional del Centro, Tandil, 1988. Bengoa, José, *Historia del pueblo mapuche*, Santiago, Ediciones del Sur, 1985.

situación, las autoridades provinciales prohibieron en todo el territorio el comercio con los salvajes “*mientras ellos no adhieran alguna transacción o avenimiento*” Pese a mantener su postura de conservar las relaciones de comercio y amistad con las parcialidades indígenas, desde 1820, puede vislumbrarse una intención manifiesta del gobierno por acrecentar su control sobre el ámbito rural y fronterizo. Pareciera que ante la expansión de la producción ganadera en las tierras nuevas, el gobierno consideró imprescindible imponer sus reglas de juego y poner fin a las actividades ilícitas desarrolladas en estos espacios. En 1821, se renuevan las prohibiciones de comprar cueros marcados a los indígenas, disponiendo la confiscación de los mismos en caso de transgredirse la norma. Esta regulación del comercio interétnico apuntaba también a cortar de raíz los circuitos de comercialización de ganado robado y de frutos del país, que como ya hemos planteado, aseguraban posibilidades de subsistencia a los pobladores rurales sin ofrecer su fuerza de trabajo en el mercado laboral.³⁵ Resulta interesante la postura asumida por los comerciantes involucrados en estas prácticas, quienes defienden su accionar en el “derecho de guerra”, argumentando que es lícito adjudicarse bienes en situación de enfrentamiento armado: para los indígenas, “los bienes no fueron robados sino que fueron pagados por el trabajo de pelear.”³⁶

Igualmente, debemos aclarar que en muchas ocasiones, la realidad del mundo fronterizo ponía límites a la intervención estatal. En Bahía Blanca y Carmen de Patagones por ejemplo, la situación de aislamiento y las necesidades de aprovisionamiento obligaban al Estado a aceptar que se dejaran de lado las directivas emanadas por el gobierno. En estos casos, los comerciantes locales estaban habilitados a comerciar directamente con los indígenas asentados en la región, que eran los oferentes principales de hacienda vacuna a cambio de bienes manufacturados.³⁷ Podríamos aventurar que desde la década de 1820, el gobierno provincial de Buenos Aires encontró en el Negocio Pacífico de Indios una forma efectiva de asegurar la dominación social, y de regular las prácticas mercantiles de aquellos comerciantes, al dejarlos bajo la tutela y el control del estado.³⁸

³⁵ En 1832, con el objeto de regularizar el comercio con los indios amigos, se reiteran las decretos y recomendaciones para prohibir el establecimiento de corrales de indios sin previo permiso del Gobierno.

³⁶ Citado en Ratto, Silvia, “Relaciones...”, *op. cit.*

³⁷ Véase Villar, Daniel y Ratto, Silvia (edit.), *Comercio, ganado y tierras en la frontera de Bahía Blanca (1850-1870)*, Bahía Blanca, Universidad Nacional del Sur, 2004.

³⁸ Véase Ratto, Silvia, “Indios amigos e indios aliados. El origen del negocio pacífico de los indios en la provincia de Buenos Aires”, En: *Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. Emilio Ravignani*, N° 5, Universidad Nacional de Buenos Aires, 1994. Relaciones interétnicas en el Sur bonaerense, 1801-1830. Indígenas y criollos en la conformación del espacio fronterizo, En: Villar, Daniel,

A modo de conclusión

En el presente trabajo hemos intentado esbozar una primera aproximación a la problemática de la regulación estatal del mercado y las prácticas comerciales en la primera mitad del siglo XIX. En virtud de tratarse de un terreno poco explorado por la historiografía y debido a la incipiente tarea de búsqueda y sistematización documental, se convirtió en una tarea difícil de encarar y, por momentos, en una temática esquivada de aprehender. En este sentido creemos que la profundización de esta tarea – especialmente el abordaje de discusiones teóricas sobre las formas estatales – nos brindará una idea más esclarecida de la relación entre la intervención estatal y los hábitos de consumo de los pobladores rurales.

Más allá de estas limitaciones, consideramos que hemos podido identificar algunos aspectos sugerentes que debieran ser explorados en posteriores investigaciones. En primer lugar, se pudo observar de qué manera en muchas disposiciones gubernamentales – especialmente en la fijación de precios, pero también en las políticas aduaneras – se reflejó una preocupación marcada por asegurar cierto bienestar a la población, haciendo alusión insistentemente a los intereses de los consumidores. Queda por avanzar en la exploración de las prácticas cotidianas de los pobladores y el grado de cumplimiento efectivo de dichas regulaciones, a partir del relevamiento de otros repositorios documentales, especialmente de expedientes judiciales. Por otra parte, para el caso de la ley de Aduanas, resultaría de interés avanzar en un minucioso estudio de precios de los artículos de consumo cotidiano durante su implementación, para vislumbrar el impacto real sobre el poder adquisitivo y las condiciones de vida de los consumidores. Más allá de estas variables, tenemos en claro el papel central desempeñado por los aspectos culturales en la determinación de los modos de comer y los hábitos alimenticios de los pobladores rurales. Esto es, ante la presencia de alzas de precios los individuos se resisten a disminuir las cantidades que habitualmente consumen de alimentos esenciales en su dieta, o modificar sus elecciones en cuanto a variedad y calidad. Más aún, si pensamos que muchas de estos alimentos y bebidas terminaban formando parte de la vida cotidiana de la gente, de sus gustos y preferencias, adquiriendo valor en tanto forma de identidad cultural y distinción social.

Por otra parte, nos ha resultado interesante de qué forma el cumplimiento de las normativas y el control de determinadas prácticas comerciales recaía sobre agentes y dispositivos institucionales como la Policía o los Jueces de Paz, ya consolidados o en proceso de definición de sus atribuciones. De esta manera, las políticas de regulación se articulaban en un entramado administrativo e institucional mucho más amplio. En el caso la ciudad de Buenos Aires, la Policía da cuenta en su funcionamiento de un modelo organizacional donde se verifica un despliegue de labor amplia, que incluye no solo el accionar represivo sino también la vigilancia de actividades comerciales al menudeo. Por último, queda por explorar el proceso por el cual, con el paso del tiempo, la fragmentaria y dispersa legislación y reglamentación referida al consumo cotidiano y las actividades mercantiles terminará adoptando formas normativas más institucionalizadas, plasmándose muchas de las preocupaciones gubernamentales en la legislación comercial y el Código de Comercio.

FUENTES DOCUMENTALES RELEVADAS:

- ≈ Registro Oficial del Gobierno de Buenos Aires. Años 1830, 1832, 1834, 1836, 1838, 1839, 1840, 1841, 1845. 1847, 1849, 1850
- ≈ Nueva Recopilación de Leyes y Decretos de la Provincia de Buenos Aires (1810-1876).

BIBLIOGRAFÍA:

- ≈ BARRAL, María Elena y FRADKIN, Raúl, “Los pueblos y la construcción de las estructuras de poder institucional en la campaña bonaerense (1785-1836)”, *Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr Emilio Ravignani”*, Tercera Serie, N° 27, 1° semestre 2005, pp 7-48.
- ≈ BARRENECHE, Osvaldo, *Dentro de la ley, TODO*, La Plata, Ediciones Al Margen, 2001.
- ≈ BEJAR, María Dolores, *Buenos Aires y la Aduana. 1809-1862*, Historia Testimonial Argentina, Centro Editor de América Latina, 1984.
- ≈ BURGÍN, Miron, *Aspectos económicos del federalismo argentino*, Buenos Aires, Ediciones Solar, 1975.
- ≈ FRADKIN, Raúl (comp.), *El poder y la vara. Estudios sobre la justicia y la construcción del Estado en el Buenos Aires rural (1780-1830)*, Prometeo, Buenos Aires, 2007
- ≈ HALPERÍN DONGHI, Tulio, *Guerra y finanzas en los orígenes del Estado argentino (1791-1850)*, Buenos Aires, Editorial de Belgrano, 1982.
- ≈ MARILUZ URQUIJO, José, *Estado e industria. 1810-1862*, Buenos Aires, Macchi, 1969.
- ≈ MAYO, Carlos (dir), *Pulperos y pulperías de Buenos Aires 1740-1830*, Mar del Plata, UNMDP.
- ≈ MAYO, Carlos (dir), *Vivir en la frontera. La casa, la dieta, la pulpería, la escuela (1770-1870)*, Buenos Aires, Editorial Biblos, 2000.
- ≈ MÍGUEZ, Eduardo “La construcción del orden social en el Río de la Plata antes de la consolidación del Estado-Nación”, *Actas “Jornadas de Trabajo y Discusión, Problemas y debates del temprano siglo XIX. Espacio, Redes y Poder”*, Mar del Plata, Ediciones Suárez /Seminario Siglo XIX, 2005.
- ≈ MÍGUEZ, Eduardo, "Guerra y Orden social en los orígenes de la Nación Argentina, 1810 - 1880, *Anuario IEHS*, N° 18, 2003, pp. 17-38.

- ≈ NICOLAU, Juan Carlos, *Industria argentina y aduana. 1835-1854*, Buenos Aires, Editorial Devenir, 1975.
- ≈ PANELLA, Claudio, *La Ley de Aduana de 1836 y su incidencia en las provincias. Un aspecto de la economía rosista*, La Plata, Instituto de Historia Argentina, Universidad Nacional de La Plata, 2000.
- ≈ RODRÍGUEZ MOLAS, Ricardo: “Las Pulperías”, En: *La vida de nuestro pueblo*, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1982.
- ≈ SALVATORE, Ricardo, *Wandering paysanos: state order and subaltern experience in Buenos Aires during the Rosas era*, Duke University Press, 2003.
- ≈ SLATTA, Richard, *El gaucho y el ocaso de la frontera*, Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 1985.
- ≈ VILLAR, Daniel y RATTO, Silvia (edit.), *Comercio, ganado y tierras en la frontera de Bahía Blanca (1850-1870)*, Bahía Blanca, Universidad Nacional del Sur, 2004.
- ≈ WRIGHT, Thomas, “The Politics of Urban Provisioning in Latin American History”, en SUPER, John y WRIGHT, Thomas (edit.), *Food, Politics, and Society in Latin America*, Latin American Studies Series, University of Nebraska Press, 1985, pp. 24-45.